

Viejas actitudes, nuevas intervenciones

El pasado 15 de agosto el exembajador de Chile en México, Hugo Vigorena, recientemente despojado de su nacionalidad chilena por la Junta Militar que gobierna su país, declaró para la prensa nacional que la escalada de violencia dirigida desde el exterior en contra del gobierno de Salvador Allende comenzó con "inocentadas" de legisladores norteamericanos.

Los comentarios de Vigorena obedecen a la publicación en días pasados de una carta dirigida al presidente Gerald Ford, firmada por 76 miembros del Congreso norteamericano, en la que reclaman que se ejerza una vigilancia más estrecha sobre la situación política mexicana, la cual, afirman ellos, está dando grandes pasos hacia la implantación de un régimen comunista en México.

Nada más absurdo, irracional y a todas luces alejado de la realidad. Cualquier examen de nuestra situación económica y política, por somero que sea, demostraría la falsedad de esta aseveración. Afirmar que México va al comunismo porque ha hecho reformas a su Constitución, es confundir la Ley de Asentamientos Humanos, destinada a regular, racionalizar y consecuentemente proteger la propiedad privada, con un decreto de socialización de los medios de producción, o con uno de prohibición o limitación a la inversión extranjera.

El régimen actual es quizás uno de los que mayores esfuerzos ha dedicado a salvaguardar el "sagrado derecho" de la propiedad privada; es por esto que en años de severa inflación, las ganancias de la iniciativa privada se han visto favorecidas como nunca antes. El temor por la suerte que correrán las inversiones extranjeras es también infundado. Uno de los últimos números de *Business Week*, consagrado por entero al análisis de la situación política y económica en América Latina, concluye que la situación actual resulta muy favorable para las firmas transnacionales. América Latina, continúa el semanario, ha adoptado finalmente "un realismo económico" al abrir sus puertas a la inversión extranjera, no tanto como fruto de una ideología, sino como necesidad práctica de aumentar la producción. Para la revista de los hombres de negocios norteamericanos, el cambio que ha ocurrido en el campo económico latinoamericano sólo alcanza a los nuevos términos con los que ahora se le designa. Lo que anteriormente se denominaba dependencia económica, hoy se califica de "realismo y pragmatismo económico".

Tal parece que el peligro no está en que los sectores públicos de las naciones en la órbita directa de influencia norteamericana pretendan controlar las áreas tradicionalmente en manos del sector privado. El propio presidente de la Cámara Americana de Comercio en México, Al Wichtrich, ha señalado que en México existe una economía mixta; una estrecha colaboración entre los dos sectores, de ninguna manera un enfrentamiento entre ellos. Esta labor conjunta

constituye la garantía de que se resguardarán los intereses de los inversionistas y comerciantes establecidos en México.

Por otra parte, concluir que el gobierno mexicano está llevando al país al comunismo, porque ha venido extendiendo sus relaciones económicas y diplomáticas con países comunistas, y porque ha ofrecido asilo a extranjeros expulsados de su país por regímenes castristas y fascistoides, es confundir pluralismo ideológicos y antifascismo, principios tan caros a la propia tradición norteamericana, con anticapitalismo.

Las distintas posiciones políticas que una nación puede adoptar se localizan en tres niveles diferenciados e irreductibles. Un primer nivel sería el defendido por los Estados Unidos, el de la democracia liberal que es por definición antifascista. Un segundo nivel estaría representado por los países que como México pugnan por un nacionalismo, reclamando una posición declaradamente anti-imperialista, pero de ninguna manera reductible a expresiones anticapitalistas propias en exclusividad de los regímenes socialistas.

México se ha declarado oficialmente no sólo antifascista, sino nacionalista; no sólo anti-imperialista, sino en contra del imperialismo concretamente norteamericano. Es quizás esta autodefinición la que provoca desconfianza e inquietud en el gobierno norteamericano, el cual estaría en todo momento dispuesto a respaldar gustosamente una posición antifascista, pero ve con recelo cualquier paso hacia adelante. El error radica en concebir el paso del fascismo al socialismo como lineal y necesariamente progresivo. El rebasar la posición antifascista y llegar a la nacionalista implica, para los ideólogos norteamericanos, un salto consecuente, y a mediano plazo la adopción de un anticapitalismo declarado.

Hasta aquí las inferencias de los legisladores norteamericanos podrían a primera vista interpretarse como falta de información, desconocimiento de la realidad mexicana, ignorancia, o incluso mala voluntad. Pero si tomamos en cuenta las motivaciones expresas que impulsaron a los 76 legisladores a suscribir la carta —un significativo 15% de los miembros del Congreso norteamericano—, su precursora en una anterior firmada por 30 miembros con fecha de 5 de mayo, y considerando la coyuntura en las que éstas fueron proporcionadas a la prensa mexicana, las aparentes “inocentadas” cobran su verdadera dimensión.

Mucho se ha enfatizado en que las cartas responden a la lucha electoral por la sucesión presidencial en los Estados Unidos. Se ha denunciado que el inspirador de la última fue el diputado por Georgia, Larry McDonald, amigo personal del candidato demócrata James Carter, y connotado miembro de la John Birch Society, famosa asociación neofascista norteamericana. El mismo presidente de la Cámara Americana de Comercio en México ha acusado a Carter de promover la publicación de las cartas para hacer aparecer a su adversario, el actual presidente Gerald Ford, como desinformado y desinteresado en los asuntos mexicanos, con el objeto de asegurarse los 5 o 10 millones de votos de los ciudadanos de ascendencia mexicana.

Sea que se trate o no de una pugna interpartidaria para ganar las elecciones, o que constituya sólo una advertencia a Ford para que en caso de resultar reelecto considere el cambio de secretario de Estado, es preciso dejar sentado, que si bien existen diferencias en materia de política interna entre los dos grandes partidos, en lo que respecta a la política externa ambos han manifestado una persistente uniformidad y consenso en cuanto a la defensa primordial de la seguridad nacional de la máxima potencia capitalista. En efecto, la política internacional ha estado asegurada por el respaldo de ambos partidos en la legislatura. Las cartas en cuestión concuerdan fielmente con este precepto, pues consideradas como expresiones intromisorias e intimidatorias, cumplen con la meta última de la política exterior norteamericana: prevenir cualquier posible agresión en contra de la seguridad nacional norteamericana.

Este espíritu ha moldeado la política exterior norteamericana a lo largo de sus doscientos años de existencia como nación. El denominador común de sus actitudes hacia América Latina ha sido la intervención en sus asuntos internos, directa o indirectamente, militar o ideológicamente. Baste recordar que en 1823 el quinto presidente de los Estados Unidos, James Monroe, sentó los principios que siguen rigiendo la política internacional de su país bajo el nombre de *Doctrina Monroe*, que ya desde entonces constituían una flagrante intromisión en los asuntos internos latinoamericanos, al estipular que los Estados Unidos no permitirían nuevas colonizaciones europeas en las repúblicas iberoamericanas.

Cabe agregar que en los últimos años el proceso de intervención se ha venido confinando, en un primer momento, a todo tipo de documentos públicos oficiales, así como a declaraciones de importantes funcionarios del gobierno norteamericano. No hay que olvidar que fue el propio embajador norteamericano, Joseph John Jova, quien inició en el presente año la ola de declaraciones arrogantes orientadas a desprestigiar la imagen internacional de México.

Aunado a este elemento verbal y retórico de la política norteamericana, se dan no sólo las deportaciones masivas de trabajadores migratorios mexicanos, sino incluso la aplicación de torturas a tres trabajadores no documentados en el estado de Arizona. Confluye también el hecho de que la dependencia norteamericana en minerales importados, ha ido aumentando a pasos agigantados. Mientras en 1950 los Estados Unidos dependían en un 15% de las importaciones por concepto de minerales y en 1970 en un 25%, las proyecciones para el año 2000 amenazan con una elevación al 60 o 70%. El problema fundamental de esta dependencia radica en que los países ricos en recursos no renovables no están muy a menudo identificados ideológicamente con los Estados Unidos. De ahí la presión que el gobierno estadounidense ha ejercido sobre México para que no ingrese a la OPEP, aun a pesar de que hasta ahora nuestro país ha declarado que si bien no pasará a formar parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, sí mantendrá los precios fijados por ella.

La carta aparece también en un momento en que el terrorismo urbano

se ha acrecentado. No es casual que uno de los puntos sobre los cuales los firmantes ponen mayor énfasis sea sobre lo que ellos llaman la

minimización por parte del presidente Echeverría de la ola de ataques terroristas, calificándolos de meras "diversiones" y "provocaciones" que no son culpa de sedicentes revolucionarios izquierdistas.

Es innegable que una ola de terrorismo se ha desplegado en nuestro país y que éste ha sido siempre atribuido a movimientos izquierdistas, sin embargo, es indudable también que en estos momentos en que la mayor parte de los países latinoamericanos han caído presos de regímenes fascistoides, los pocos países que han logrado mantenerse a salvo, México entre ellos, se enfrentan a una cruenta lucha por conservar sus resabios de libertad. En esta lucha, los actos terroristas fungen como elementos desarticuladores del control central nacional y consecuentemente como promotores de golpes de Estado ultraderechistas.

Cabe por último preguntarnos por qué es precisamente el Congreso de donde emanan las últimas intervenciones de las que México ha sido objeto. El Congreso norteamericano ha fungido tradicionalmente como el abanderado por excelencia de los distintos intereses del pueblo que representa. La posición crítica que adoptara en asuntos como Watergate o la asistencia militar externa vienen a confirmar que la función del legislativo norteamericano ha sido la de velar por los principios y valores que tanto la población estadounidense como el gobierno mismo han erigido en la expresión última de su identidad.

Estos valores de libertad individual, libre empresa, eficacia, movilidad social y política, encuentran su encarnación, según el sentir de la población norteamericana, en la noción de democracia liberal, en su sistema de gobierno, en su carácter nacional y, finalmente, en el papel mundial que dicho carácter los ha llamado a desempeñar.

La defensa de este carácter nacional y de este sistema de gobierno justifica a sus propios ojos el papel que se han atribuido de guardianes del "mundo libre", protectores del orden y la estabilidad del sistema internacional, tan necesarios para el funcionamiento adecuado de sus negocios y a los cuales deberán subordinarse las demás aspiraciones humanas como la paz, la justicia y la igualdad.

No es entonces sorprendente que según los 76 legisladores, las motivaciones de su llamado de atención sobre los acontecimientos amenazantes que se están desarrollando en México hayan sido morales y humanitarias, en la medida que se identifican con su afán de velar porque los 65 millones de mexicanos permanezcan fieles a los principios de su ideología.

Dado que la garantía de su hegemonía ideológica es la estabilidad internacional, la cual depende de la existencia de un consenso internacional sobre los fines y medios políticos permisibles y frente al repudio que las ocupaciones militares provocan al interior mismo de los Estados Unidos, sus esfuerzos se

han orientado a aplicar preventivamente frenos a todo aquello que pudiera semejarse a un movimiento revolucionario.

Hoy, en un mundo dominado por la desigualdad, provocada en gran medida por los afanes expansivos del modelo de la democracia liberal: el imperialismo norteamericano y en un hemisferio donde hasta el momento la única alternativa al fracaso del modelo desarrollista para el capitalismo dependiente ha sido el fascismo, desprestigiado globalmente, el mito libertario norteamericano ha caído en desgracia.

Sin embargo, frente a la experiencia de las exitosas intervenciones de los Estados Unidos contra reales o imaginarias revoluciones sociales en el Tercer Mundo, es preciso levantarse y denunciar toda intromisión por inocente que parezca, siempre cuidadosos de que no suceda lo que en palabras del connotado historiador, Carlos Pereyra, ocurrió al presidente Carranza, que mientras llevaba adelante su campaña en contra del intervencionismo imperialista, las empresas extranjeras seguían extrayendo nuestro petróleo.

26 de agosto de 1976

Jacqueline Peschard